

Víctimas y victimarios en la batalla por la legitimidad del terrorismo

Rogelio Alonso *

Todo proceso de paz acaba generando un relato. Un relato, por desgracia, no siempre fácil de construir y que en la mayoría de los casos, no olvidemos el fin del terrorismo del IRA, supone un sutil e interesado enfrentamiento entre victimarios y víctimas. Enfrentamiento en el que las víctimas muchas veces acaban perdiendo y ocupando un segundo lugar; lugar, por cierto, no merecido y al que los políticos y la opinión pública contribuyen más de lo que sería justo y necesario.

Un relato con vencedores y vencidos imprescindible

«Aviso a los que quieren un relato de vencedores y vencidos: el que convenza, vencerá» (*Gara*, 2/10/2011). La advertencia del editorial publicado en el órgano de propaganda del nacionalismo radical revela los términos en los que el entorno terrorista define el desafío al que se enfrenta la sociedad vasca después de que ETA haya anunciado el «cese definitivo de su actividad armada»: la batalla por la legitimidad de décadas de terrorismo y por glorificar la historia criminal de ETA. Mientras quienes han justificado y apoyado

* Profesor titular de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos.

la violencia han fijado como su objetivo la legitimación de atroces crímenes –a lo que contribuye su presencia en las instituciones en la forma de Bildu y Amaiur sin condenar a ETA mientras ésta sigue sin desaparecer y, por tanto, manteniendo su amenaza latente–, algunos actores democráticos que deberían impedirlo facilitan tan peligroso fin. Así ocurre al reclamarse desde algunas formaciones políticas democráticas un «relato veraz de lo ocurrido» que, sin embargo, resulta incompatible con actitudes que ignoran las responsabilidades políticas, penales, históricas y morales de quienes han violado derechos humanos fundamentales.

Lo ejemplificaba la reacción del Lehendakari Patxi López a la condena a Otegi de diez años en septiembre de 2011 por el denominado caso Bateragune, esto es, la reconstrucción de la estructura de la ilegalizada Batasuna «siguiendo instrucciones de ETA». La máxima autoridad institucional vasca valoró el dictamen judicial como una «decisión que no acompaña a los tiempos que estamos viviendo». Alimentaba así el victimismo de los radicales coadyuvando además a la rehabilitación del dirigente terrorista que ni en ese momento ni en la actualidad ha evidenciado su ruptura con ETA pese

a las erróneas e infundadas opiniones en sentido contrario alimentadas por fuentes políticas y periodísticas diversas. Por tanto, el Lehendakari estaba deformando el relato veraz de lo ocurrido, distorsionando la realidad que muestra cómo ETA y su frente político mantienen su simbiosis y, en consecuencia, y en contra de lo que el propio Lehendakari anunció en su discurso sobre el futuro del País Vasco en 2011, diluyendo las responsabilidades que Otegi debe asumir.

La perspectiva comparada desvela las consecuencias que en Irlanda ha tenido ese inmerecido lavado de imagen de quienes rehúsan convertirse en agentes activos de deslegitimación del terrorismo que ellos mismos han practicado. La candidatura a la presidencia irlandesa presentada en 2011 por Martin McGuinness, dirigente del IRA durante décadas, expuso los negativos efectos de la tolerancia dispensada a quien hoy sigue sin condenar ni deslegitimar los cientos de asesinatos cometidos por la banda que él lideró. Muchos de quienes se escandalizaron ante la posibilidad de que McGuinness se convirtiera en el representante de los valores de la nación son los que facilitaron el enmascaramiento de su trayectoria criminal con el propósito, argumentaban, de fa-

vorecer su incorporación a la democracia. También McGuinness recibió durante la campaña la indulgente calificación de «hombre de paz» con la que se intenta rehabilitar a Otegi, logrando que esa etiqueta ocultase su identidad como responsable de numerosas atrocidades. Políticos y formadores de opinión miraron selectivamente al pasado de McGuinness, eludiendo exigencias lógicas para aceptar su participación en democracia: la condena y deslegitimación de la campaña terrorista del IRA. La renuencia a respetar requisitos tan básicos permitió la transición de McGuinness desde la violencia sin la autocrítica precisa para contrarrestar la mitificación del terrorismo, que aún es considerado como necesario y honorable por quienes lo perpetraron. Se ha construido de ese modo un relato presentado como veraz que sin embargo resulta falaz, pues permite reescribir la historia al presentar el terrorismo del IRA como legítimo.

Durante los años que sucedieron al «alto el fuego» del IRA decretado en 1994, roto en 1996 e instaurado un año después, importantes actores democráticos evitaron exigir una categórica deslegitimación del terrorismo aduciendo que de ese modo facilitaban la ruptura con el pasado terrorista, favore-

ciendo así una amnesia colectiva con la que han logrado encubrirse los hechos históricos. La verdadera historia se ha ido sustituyendo por un conjunto de relatos que el tiempo ha revestido de una dañina verosimilitud. El gradual distanciamiento con el pasado terrorista aleja esa realidad, debilitando la memoria de quienes fueron testigos pero también moldeando la visión de quienes sólo han conocido a los terroristas como «hombres de paz». «No importa mi vida en el IRA», afirmaba con arrogancia McGuinness durante la campaña presidencial del 2011 para blindarse frente a la exigencia de responsabilidades, relativizando una militancia terrorista que se niega a deslegitimar tras renunciar a ella por motivos tácticos.

Al igual que en Irlanda, en el País Vasco algunos demócratas debilitan sus argumentos en la batalla por la ilegitimidad de la violencia ofreciendo al entorno terrorista sucesivas muestras de legitimación. Sucedió al interpretarse la Declaración de Gernica elaborada por diferentes formaciones políticas en 2011 como un paso hacia la paz cuando ni siquiera exige la desaparición de ETA y condiciona su final a una negociación sobre los objetivos políticos de la banda. Esa incoherente actitud impide

afianzar un relato veraz sobre ETA a la que el propio Lehendakari vincula con otros «terrorismos», como hizo en su discurso oficial sobre el futuro del País Vasco en septiembre de 2011, induciendo a tergiversar las auténticas causas de la violencia etarra.

Se traslada así sobre la sociedad una injusta presión al obligarla a asumir un relato repleto de falsedades incapaz de contrarrestar el reproducido por ETA y sus simpatizantes: votemos a quienes son presentados como comprometidos pacifistas, recompensemos a quienes prometen el fin del terrorismo sin romper con su pasado de terror y sin admitir que ese señuelo de un futuro de paz jamás podrá serlo si los terroristas se niegan a aceptar la ilegitimidad e injusticia de su violencia. Como demuestran los resultados electorales de Bildu y Amaiur en 2011, esa presión ha resultado eficaz. Por ello, si en aras de un aparente pragmatismo continúan confundiendo tácticas propagandísticas con esfuerzos por la paz, el relato al que constantemente aluden el Lehendakari y otros actores políticos jamás se construirá sobre la verdad; se asentará en cambio sobre reinventiones y manipulaciones con las que se ofrecerá una versión corrompida del pasado. Si en el presente no se cuestionan las

intenciones de quienes siguen sin asumir su responsabilidad por el terrorismo, ¿por qué habría de exigírseles en el futuro la asunción de unas responsabilidades de las que ahora se les exime? Cada valoración positiva con la que el gobierno autonómico y otros actores democráticos recompensan los gestos propagandísticos del entorno etarra fortalece a quienes aún legitiman a ETA, brindándole un triunfo en la batalla por la legítimidad de un terrorismo que, evidentemente, es absolutamente ilegítimo e inmoral.

Las víctimas del terrorismo como arma en la estrategia de los victimarios

Es ésta una batalla en la que las víctimas del terrorismo también han sido utilizadas por sus victimarios, como pone de manifiesto el comunicado que en diciembre de 2011 hizo público el entorno político y social de la banda con alusiones a quienes sufrieron la violencia etarra. En esa ocasión, la respuesta a semejante instrumentalización de las víctimas del terrorismo fue menos positiva que frente a otros pronunciamientos de los radicales, aunque diversos medios de comunicación y políticos habían presentado la iniciativa como un valioso gesto de dicho

entorno incluso antes de conocer sus pobres contenidos.

Ya en 2006 Arnaldo Otegi calificó como «un error» que la «izquierda abertzale» diera «a entender que el sufrimiento de los otros no era igual y que el fin lo justificaba todo». Sus comentarios sirvieron para intentar justificar la negociación entre gobierno y ETA: para José Luis Rodríguez Zapatero se recorría «el camino adecuado dándose pasos en la buena dirección» y José Blanco dedujo «un arrepentimiento» de lo dicho por el portavoz del brazo político de ETA. Un artículo en *Gara*, el diario que ha apoyado el terrorismo etarra durante años, revelaba lo incorrectas y exageradas que eran las valoraciones gubernamentales. Con el significativo título de «¡Qué buenos son ahora los de Batasuna!», el articulista aclaraba que «no era la primera vez que Batasuna se solidarizaba con quienes habían padecido las consecuencias» de la violencia etarra, y que «tampoco era inédito que ese tipo de hechos fueran calificados de muy graves». La novedad radicaba «en la reacción del Gobierno español y de determinados medios de comunicación» al ensalzar «lo que meses antes se hubiera tachado de insuficiente».

El precedente ilustra cómo ciertas declaraciones del entorno terroris-

ta se distorsionan a su favor, rehabilitando a quienes siguen sin condenar el terrorismo y sin convertirse en agentes verdaderamente activos en la deslegitimación de la violencia. La frialdad general con la que se ha recibido el último documento sobre víctimas hecho público en diciembre de 2011 sugiere que en esta ocasión el ejercicio propagandístico de los radicales fracasó parcialmente. No obstante, la escenificación del anuncio y las expectativas alimentadas revelaba su deseo de instrumentalizar la experiencia norirlandesa para extraer réditos. Las «disculpas y condolencias» que en 2002 el IRA ofreció a las «víctimas no combatientes» es una referencia para quienes tras utilizar el terrorismo de ETA para imponer sus objetivos ahora convierten a las víctimas en un arma de su estrategia política.

Desde algunos ámbitos políticos y periodísticos se definió el comunicado del IRA como «histórico» y «sin precedentes», favoreciendo el lavado de imagen del Sinn Fein y un consecuente fortalecimiento electoral como el que en nuestro propio país se le facilita a los representantes políticos de ETA con ciertos posicionamientos de formaciones políticas y medios de comunicación. Pese a que la declaración del IRA eludía deslegitimar su campaña y la autocrítica, tan

decepcionantes contenidos fueron celebrados por observadores supuestamente interesados en que la sociedad avanzase aún a costa de hacerlo retrocediendo. Así ocurría al aceptarse subrepticamente la impunidad implícita a tan injusta recompensa por un mero gesto publicitario con el fin de reproducir los elementos precisos para eximir al IRA de las responsabilidades que debía asumir por sus atrocidades.

El IRA se limitó a reconocer el sufrimiento de «todas las víctimas del conflicto», disculpándose por una parte de su violencia que, no obstante, consideraba en su totalidad necesaria y legítima. El discurso del entorno político de ETA se inspira en una iniciativa como aquella que buscaba consolidar una narrativa sin «una jerarquía de víctimas» y, por tanto, sin la imprescindible deslegitimación del terrorismo culpable de la injusta victimización de tantos seres humanos. Con genéricas alusiones a «errores colectivos» se perseguía una impunidad como la que a veces se acepta en nuestra sociedad pese a la insistencia pública en evitarla. Se evidencia una peligrosa impunidad al tratar como auténticos demócratas a quienes han respaldado el terrorismo durante décadas, como sucede cuando desde prestigiosos ámbitos se

les ofrecen privilegiadas plataformas para exponer su propaganda de manera acrítica y sin réplica. El hecho de que algunos medios les ofrezcan ese altavoz confiere una valiosa credibilidad a actores merecedores de un trato diferenciado, pues de lo contrario se equipara a víctimas y demócratas que respetaron la legalidad con quienes no lo hicieron.

Esa impunidad política y moral se aprecia al confundir el acatamiento táctico de ciertas normas para entrar en el sistema, como han hecho Amaiur y Bildu, con la verdadera y plena asunción de la democracia, pues ésta obliga a una condena sin ambages del terrorismo y a su activa deslegitimación, algo que no se ha producido. Impunidad apreciable también cuando se aplaude un mero reconocimiento de las víctimas que elude la autocrítica de quienes las causaron y la deslegitimación de la ideología que las ha justificado. La carencia de una contundente condena moral, humana y política convierte en insuficiente la crítica al terrorismo por su inconveniencia táctica. Mientras no haya un absoluto repudio del terrorismo causante del sufrimiento que dicen reconocer, el dolor y las víctimas habrán resultado necesarios y, por tanto, legítimos. Se engañan quienes aventuran que resulta inapropiado exigirlo ahora

para que llegue más tarde: como enseña Irlanda del Norte, inútiles serán las exigencias en el futuro cuando se evitan en el presente.

Así se deduce de la exención de responsabilidades con la que se premia a los radicales, como ejemplifican declaraciones de Otegi en diciembre de 2011 en un influyente medio de comunicación al lamentarse de «no haber podido contribuir más eficazmente a que llegara antes el cese de ETA». De ese modo se distanciaba de una violencia que atribuye a otros, como si no la hubiera dirigido y alimentado, pues jamás ha condenado a la banda a la que ha pertenecido durante décadas. Los hechos constatan que el relato de Otegi no es veraz, pero resulta verosímil al ser reproducido en medios democráticos que le reportan una con-

fiabilidad. Tan injusta dinámica se reproducirá si se acepta reemplazar la ineludible y clara deslegitimación de la violencia por el mero reconocimiento de un daño a las víctimas que resulta redundante e insuficiente, al quedar absolutamente vacío de contenido ante la ausencia de una asunción de culpabilidad. Ello exige que quienes han causado víctimas con el fin de imponer un objetivo político, víctimas que ahora utilizan en beneficio propio, asuman y cumplan sus graves responsabilidades penales, pero también las políticas, sin la indulgencia que algunos demócratas pueden regalarles. Como el jesuita José María Tojeira escribió en relación con las injusticias cometidas en El Salvador, «No es bueno, ni justo que se conviertan en protagonistas de la paz aquellos que crearon víctimas». ■